

á la Corte Suprema de Justicia en revision, como previenen los arts. 13 y 27 de la ley orgánica de amparo, de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber:—*I. Manzanilla.*—Ante mí: *José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 23 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por los Sres. Tomás Poveda y socios y el C. Luis Fuente, contra el C. Administrador de fondos municipales que les cobra el impuesto llamado de media patente, con violacion del artículo 16 de la Constitución federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que la junta que hizo la graduacion del capital en giro de los quejosos, y que ha servido de base al cobro del C. Administrador de los fondos municipales, segun la ley debia componerse de cinco personas, de las cuales dos son tachadas de incompetentes por los individuos que promueven este juicio; que aun dando por probada esta tacha, las decisiones de la junta serian válidas por ser su mayoría compuesta de las personas autorizadas por la ley para ejercer las funciones de junta calificadora.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito, que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema

Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por el C. Lic. Matías Padilla, defensor de D^a Francisca Urtis y D. José María Amescua, contra el C. Prefecto de Morelia, que los condenó á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

En el juicio de amparo que tiene promovido el C. Lic. Matías Padilla, como defensor de D^a Francisca Urtis y de José María Amescua, sentenciados por la Prefectura de esta Capital á la pena de muerte, por el delito de plagio cometido en la persona del Dr. D. Octaviano Valdez, figuran como hechos fundamentales de la queja, primero: ilegalidad en la aplicacion de la ley de 3 de Mayo de 1873, prorogada por la de 3 de Abril del presente, supuesto que no está justificado que sus defensos hayan cometido el delito de que se trata; segundo: incompetencia de la autoridad para conocer y fallar, no solo por la falta de pruebas, sino por no ser la autoridad aprehensora; y tercero: el haberse negado los medios de defensa.

Estos hechos que han debido ser la materia de prueba en el juicio de que se trata, son á su vez los que tienen que examinarse, con presencia de las constancias del mismo.

En cuanto al primer punto, existen en contra de los quejosos todas las constancias de la causa que se ha formado en averiguación de los hechos, hasta quedar terminada con la sentencia de muerte que se pronunció en 28 del próximo pasado.

En dicha causa se registra como pieza principal á la foja 50, la propia confesion de la Urtiz, corroborada con los carcos celebrados con José María Amescua y Santos Mejía, quienes aseguran haber estado en el mismo día en que se cometió el delito, y en la propia casa de la reo, los individuos que asaltaron á Valdéz, conviniendo en todo con las señas particulares de cada uno de los plagiarios.

Existen además las declaraciones de Antonio Barriga, Tomás y Manuela Morales, así como los carcos celebrados con los reos; de manera que todas las diligencias de esta causa, vienen á confirmar el participio directo ó inmediato que en el plagio de Valdéz han tenido los reos de esta causa. De la lectura de esta se desprende, que tanto la Urtiz como Amescua, no deben considerarse como cómplices, en la ascepcion legal de la palabra, toda vez que el exámen de cada una de las diligencias practicadas, descubre el participio que han tenido los reos, como autores principales del delito. Se comprende perfectamente bien, que este fué fraguado en la casa de la Urtiz, de acuerdo con Amescua y con los tres individuos que asaltaron á Valdéz.

Por otra parte, está plenamente probado que éste fué conducido por la Urtiz, de acuerdo con Amescua y con los tres individuos, al rancho de Opongío, bajo el pretesto de curar unos enfermos que no eran de gravedad; que se le negó una canoa para regresar por agua á Quiroga, no obstante que habia dos disponibles; que el mismo día se cometió el plagio, y que Amescua no fué molestado por los asaltantes, ni se le vendó y amarró como á Valdéz y á su criado.

Todos estos hechos de que se hace un ligero apuntamiento, justifican la sentencia

de 28 del pasado; y supuesto que el defensor ha tratado de nulificarla en su base, se hace preciso examinar á este, respecto las pruebas que él ha aducido.

Los dos interrogatorios que presentó en este Juzgado el citado defensor, comprenden como principal, para el hecho de que se trata, que la Urtiz no llegó á pedir audiencia, y que se ejerció violencia para arrancarle su confesion. De lo primero, deduce la suplantacion de la diligencia de la foja 50 de la causa, y de lo segundo, la nulidad de la misma, caso de que hubiera tenido lugar.

Verdad es que dos personas empleadas en las recogidas de esta ciudad aseguran, que la Urtiz no llegó á solicitar audiencia; pero de la comprobacion de este hecho no se deduce la consecuencia que pretende el defensor.

En efecto, á la foja 49 vuelta del proceso, se registra el careo celebrado entre la Urtiz y Amescua, y á continuacion viene la confesion hecha por la misma, en la comparecencia que solicitó despues del careo.

Si todo esto pasa en una continuacion de hechos, sin que la reo hubiera vuelto al lugar de su prision, ¿que significa para el caso la prueba del defensor? Absolutamente nada.

En cuanto á la violencia ejercida, tampoco existen los justificantes debidos; porque los testigos declaran de oídas; el certificado de la foja 47 es inconducente, y el dicho de Santos Mejía es singular y sospechoso, por otra parte, en el presente juicio, supuesto lo que tiene declarado en la causa principal.

Por lo que toca á Amescua, nada hay justificado en su favor para que pueda juzgarse mal aplicada en su persona, la ley de plagiarios.

Las demas informaciones que se registran de la foja 10 á la 34, no deben estimarse con valor legal para los efectos de este juicio, supuesto que han sido levantadas antes de él y para que sirvieran de constancia en

el proceso. Falta no solo la citacion fiscal, sino que los testigos no se ratificaron para el objeto del amparo.

Hay sin embargo que observar, que los puntos capitales que comprenden, son los mismos que no se han comprobado en este juicio, y que el interrogatorio de la foja 10 fué levantado despues de que se sentenció á la Urtiz por la Prefectura; el de la foja 14 se presentó en 2 de Mayo, dias antes del plagio, lo mismo que el de la foja 19 y el de la 30, siendo el de la 32 el único que debe considerarse, por estar aun dentro de los quince dias improrogables que señala la ley de plagiarios. Pero esta informacion aun cuando fuera buena, no fué ratificada oportunamente, y por otra parte, los testigos no fundan su dicho. Las demás constancias que allí mismo se registran, han sido estendidas con posterioridad á la sustanciacion de la causa, y aun cuando fueran admisibles en el juicio de amparo, no probarian el intento del actor.

Quede pues sentado, que la prueba de la culpabilidad de los reos como principales en el delito de plagio del Dr. Valdéz, se halla confirmada por las diligencias del proceso y apoyada en las leyes 2 y 5 tít. 13 part. 3ª, y que no habiendo justificado lo contrario el defensor, ha sido legal la aplicacion de la ley de plagiarios, por lo que no ha habido violacion en la persona de los quejosos, de las garantías consignadas en la 1ª parte del art. 13 de la Constitucion federal.

En cuanto á la incompetencia de la autoridad que conoció en el proceso, supuesto que no hay prueba que la funde, bastan unas ligeras reflexiones con presencia de los hechos y de la ley de 2 de Mayo del año próximo pasado, prorogada por la de 10 de Abril del corriente, para convencerse de que dicho proceso ha sido sustanciado por la autoridad legítima.

Dice la ley en su artículo 3º, lo que sigue: "Los salteadores y plagiarios aprehendidos infraganti, serán castigados con la pena capital, sin mas requisito que el levanta-

TOMO VI.—PARTE II.

miento de una acta por el Gefe de la fuerza aprehensora, en cuya acta se haga constar el hecho de la aprehension infraganti y la identificacion de las personas. Los que no fueren aprehendidos infraganti, serán juzgados sumaria y verbalmente por las autoridades, cuyos agentes hayan hecho la aprehension, bien sean las autoridades políticas de los Distritos, ó los Gefes militares de la Federacion ó de los Estados. El término del juicio, no podrá exceder en ningun caso del plazo perentorio é improrogable de quince dias, durante los cuales, podrán los procesados presentar las pruebas y defensas que á su derecho convengan. Dentro de dicho término, se pronunciará sentencia de muerte si fuere probado el delito, la que se ejecutará sin admitir otro recurso que el de indulto, segun lo dispuesto por el artículo 5º de esta ley."...Este artículo como se vé, comprende dos casos, siendo el segundo, el que forma la materia de la presente cuestion, toda vez que los reos no fueron aprehendidos infraganti.

Del tenor de la ley se desprende, que la autoridad aprehensora es la competente para conocer de estas causas, bien sea que verifique la aprehension por si misma ó por sus agentes, aun cuando aquella sea la política ó la militar; de manera, que la ley en estos casos, lo único que quiso fué expeditar la accion de la justicia que demandaba la vindicta pública, y por eso no concedió jurisdiccion á las autoridades de que hablo.

Esto supuesto: ¿la tuvo el Prefecto de la Capital, para conocer en la causa de plagio de que se trata? Nadie ha puesto en duda que los prefectos políticos de los Distritos, estenden su jurisdiccion á todo él, y que aun cuando los Presidentes de ayuntamientos de las municipalidades, tienen ciertas funciones propias, respecto de las cuales solo cabe la dependencia de la ley, ejercen por sí mismos otras, como encargados por decirlo así, de la autoridad política del Distrito. Admitida esta distincion, es incuestionable que para el caso presente no pueden considerar-

se sino como agentes, en el sentido de la ley, los Presidentes de Ayuntamiento de Municipalidad.

Hay otra consideracion de no menor importancia que se desprende de la misma ley, sobre suspension de garantías individuales, y descansa en la generalidad de los hechos. Esta ley suspendió las garantías de que habla, por razones que no es del caso ahora consignar; pero en la mente del Legislador no estuvo causar otro género de mal. Así pues, de admitirse la inteligencia que le dá el defensor, resultaría muy frecuentemente, que cualquiera autoridad de un orden inferior viniera á animar y á decidir un proceso tan importante por su propia naturaleza, y en tal caso, no solo contaria el procesado con la suspension de las garantías de la ley, sino con el gravísimo mal que de ordinario resulta de la mala formacion de una causa por falta de aptitud y de inteligencia, á cuya circunstancia se agrega, la premura del tiempo, que la ley prefijó como improrrogable.

Basta lo expuesto, para asentarse que la autoridad que conoció en la causa del plagio, es competente por la ley, y de consiguiente, que sus procedimientos no violaron las garantías individuales de que se ha hecho mérito en el primer punto, ni la consignada en la primera parte del artículo 21.

Resta por último examinar lo relativo á la denegacion de la prueba, con lo cual cree atacadas el defensor, las garantías del artículo 20.

Antes de ver las diligencias del proceso, relativas á este hecho, es preciso que se fije la atencion en el artículo 3º de la ley de plagiarios, que dice: que, *dentro del término señalado, podrán los procesados presentar las pruebas y defensas que á su derecho convengan*; y que en el artículo 10 se dice, que no se rechazará á los abogados para la defensa de los reos. Se vé por lo mismo, muy claramente, la amplia libertad que estos tienen para su defensa, y que no se impone á la autoridad que juzga, la obligacion

precisa de nombrar abogados defensores, sino que tan solo se ordena no se rechacen estos cuando sean nombrados, se entiende voluntariamente por los mismos reos. Pasemos al proceso.

En 11 de Mayo, comenzó á instruirse esto, y en 26 dispuso el C. Prefecto se notificara al abogado defensor el nombramiento que habia hecho en su persona para sostener el derecho de los reos; de suerte, que esta autoridad hizo en favor de los mismos, mas de lo que la ley le ordenaba. Hecha la aceptacion, se produjo una informacion en su mayor parte sobre puntos que aparecian ya consignados en la causa, y sobre otros que no era posible esclarecer en el breve tiempo que restaba, por lo que se ordenó: que el defensor levantara dicha informacion por cuerda separada y se agregara á la causa. Pero lejos de hacerse esto así, ni siquiera se habia presentado el abogado oportunamente á producir su defensa, por lo que fué preciso exitarlo por la Prefectura, (fojas 55 y 56 de la causa). Además, no consta que á los reos se les haya negado sus medios de defensa; de manera, que el término de la ley ha corrido á su favor, sin que dejaran de saber de lo que se trataba, supuesto que ellos mismos en algunas de sus declaraciones han manifestado, que no ignoraban el origen de la causa y la aplicacion de la ley.

Sobre este particular, trata de probar el defensor, que no se le permitió comunicarse con los reos, y que aun se le negó por la Prefectura la copia de la sentencia. Esta prueba como puede verse de autos, no salió conforme con el intento propuesto, porque está averiguado, que la audiencia solicitada por el defensor, fué cuando los reos estaban no solamente sentenciados por la Prefectura, sino aun despues de habérseles negado el indulto, y que la copia de la sentencia quizo recogerla despues de remitido el proceso á la Legislatura del Estado para los efectos del indulto.

Por lo que toca á las observaciones que

se hacen, tomadas del artículo 20 constitucional, baste decir, que quedaron suspensas las garantías de que habla el artículo 1º de la ley sobre salteadores y plagiarios, y que por lo tanto, malamente se invoca en este caso la violación de ellas en la persona de los reos.

Por todo lo expuesto, el Promotor fiscal pide, con fundamento de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se declare: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Doña Francisca Urtiz y á José María Amescua, contra los actos del C. Prefecto de esta Capital, en virtud de los cuales fueron juzgados y sentenciados con arreglo á la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, prorogada por la de 10 de Abril del corriente año, por no haberse violado en sus personas ninguna de las garantías constitucionales.

Morelia, Julio 29 de 1874.—*N. Oaballero*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, 10 de Agosto de 1874.—*Isidro Aleman*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Agosto 4 de 1874.—Visto estas disposiciones generales 6 de los en contrario hubiere. De es- se deduce, como una conse- ual, que siempre que surjan por violación de garantías no stá expedita la acción de la Jus- las invocadas por el C. Lic. Pa- do sus defensos, se reducen á , incompetencia de la autoridad sentencia que priva de la vida os; segunda, falta de fundamen- sma providencia, por no estar delito que se les imputa, cuyas stán expresamente consignadas 3 de la Constitución, que no ha so por la ley de plagiarios.

proceso no se hayan violado mas garantías individuales que las contenidas en la primera parte de los arts. 13 y 19, y en los 20 y 21 de la Constitución federal, pero no cuando la violación ha recaído en garantías no suspensas y en las que establece en fa- vor de los acusados, la misma ley citada.

2º: Que las invocadas á favor de los reos por su defensor, son las consignadas en el art. 16, que no ha sido suspendido por la ley referida y las contenidas en esta mis- ma en su art. 3º citado, y consisten en que los reos no aprehendidos infraganti, sean juzgados breve y sumariamente; que duran- te el juicio se les admitan las pruebas y defensas que presenten, y que no se les aplique la pena de muerte, sino cuando el delito resulte plenamente probado; circums- tancias que faltando todas ó alguna de ellas, fundan el juicio de amparo, principalmente si se tienen presentes los preceptos de los arts. 1º y 126 de la Constitución general, en los que se establece, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, que todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sos- tener las garantías que otorga la Constitu- ción, y que esta es en fin, la Suprema ley á que deben normarse todas las demás y

sugetar las fallas judiciales. En consecuencia, el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Matias Padilla, defensor de María Francis- ca Urtiz y de José María Amescua, contra la sentencia del C. Prefecto de esta Capi- tal de 28 de Mayo próximo pasado, que condenó á los expresados á la pena capital, por el delito de plagio.

Considerando 1º: Que si bien el art. 3º de la ley de 3 de Mayo de 1873, proroga- da por la de 10 de Abril de este año, pre- viene que las sentencias que se pronuncien en las causas formadas contra los plagia- rios y salteadores de caminos, se ejecuten sin admitir mas recurso que el indulto, tam- bien lo es que dicha disposición se entiende bajo el concepto de que el delito resulte plenamente probado, y que en el curso del

cualesquier Estados qu- tos princip- cuencia na- controvecia- suspensas, ticia federa-

3º: Que dilla á favo- dos: primer- que dictó l- á los acusos- to de la n- probado el- garantías- en el art. 1- sido susper-

4º: Que respecto de la primera, no existe la razon alegada por el defensor de no ser el C. Prefecto sino el C. Presidente del Ayuntamiento de Quiroga, el que debia juzgar á los acusados, por haber sido este el que hizo su aprehension, por que el art. 3º de la ley citada, inviste de esta jurisdiccion á las autoridades cuyos agentes hubieren hecho la aprehension, ó á los Gefes políticos de los distritos; y si bien es cierto que el C. Presidente del Ayuntamiento de Quiroga fué el que aprehendió á los procesados, tambien lo es que no es él la autoridad política del distrito de Morelia, sino solo su agente, puesto que Quiroga no es mas que una municipalidad perteneciente á aquel Distrito. El Prefecto pues, de esta Capital, es el competente para conocer del delito de plagio, una vez que uno de sus agentes fué el que aprehendió á los procesados.

5º: Que en cuanto á la segunda garantía invocada, es decir, á la falta de fundamento de la providencia dictada en contra de estos, aparece claramente demostrada, tanto en la misma acta del proceso, como en el informe sin justificacion de la autoridad responsable. Respecto del primero, es decir del proceso, este adolece de los siguientes defectos jurídicos que lo reducen á un simple conjunto de diligencias, sin fuerza ni valor alguno probatorio: Primero: el sumario casi en su totalidad, está instruido por el Presidente del Ayuntamiento de Quiroga, que como ya se ha dicho, no es autoridad competente, puesto que carece de jurisdiccion para conocer del delito de plagio, y que no ejerce funciones ningunas judiciales, puesto que la ley de 3 de Mayo de 1873 solo concede estas á los Gefes políticos de los Distritos, y no á sus agentes.

La irregularidad del proceso se patentiza con el siguiente dilema: ó el sumario es válido y legal y entonces la sentencia resulta nula por no haberla dictado la autoridad que formó aquel, ó es nulo y vicioso, y entonces la sentencia tambien lo es, por ser la consecuencia necesaria de aquel. Segun-

do defecto jurídico del proceso: ninguna de las declaraciones de los testigos han sido ratificadas con citacion de los reos y dándoles á conocer los nombres de aquellos, y este defecto es tan sustancial, que segun todos los tratadistas, fundados en la ley y en una práctica constante, invariable y general, quita á la prueba de testigos todo su valor y fuerza. Entre otras doctrinas y disposiciones que así lo enseñan y establecen, pueden verse la de Gutierrez, Práctica criminal, tomo 1º cap. 8º párr. 29; la de la Curia Filípica Mexicana, pág. 448 párr. 113; Diccionario de Legislacion de Escribche, palabra "Juicio criminal" párr. 90, ley 17 tít. 13 lib. 12 N. R., art. 125 de la de 28 de Mayo de 1837, y 250 de la de Administracion de Justicia del Estado, de 27 de Abril de 1867. Tercer defecto jurídico del proceso: algunas declaraciones de los testigos y careos de estos con los reos que han servido de único fundamento á la sentencia de la Prefectura, son nulos de derecho, por que han sido practicados contra prohibiciones expresas de las leyes.

Santos Mejia, hijo de la Urtiz, Agustin Saabedra, yerno de la misma, María Manuela Morales su cuñada y José María Amescua, doméstico y cómplice de la repetida Urtiz, son los testigos mas desfavorables á esta; pero su testimonio está calificado por las leyes sin fuerza y valor probatorio, y respecto de los dos primeros, está vedado al Juez obligarlos á declarar, porque como dice muy juiciosamente el Sr. Escribche en el párr. 17 núm. 4 del juicio criminal, seria obligar á la naturaleza á acallar los sentimientos de respeto y gratitud que los hijos deben á los padres, y constituirlos en sus delatores. Las leyes 10, 11, 14 18 y 20 tít. 16 part. 3ª, repelen en las causas criminales el dicho de los ascendientes y descendientes, de los parientes hasta el cuarto grado, de los domésticos y del cómplice en el mismo delito. Cuarto y último defecto jurídico del proceso: infraccion de la ley natural, base y origen de todo derecho, re-

conocida aun por la misma ley de 3 de Mayo de 1873 en sus arts. 3º y 1º. El 1º establece, que dentro de los quince días que señala para el juicio, podrán los procesados presentar las *pruebas y defensas* que á su derecho convenga; y á la foja 54 frente, al fin, consta que el defensor de los reos presentó el 26 de Mayo algunas pruebas y defensas en favor de sus clientes; y al pie de la 55 vuelta, consta tambien que le fueron denegadas, no obstante faltar aun 48 horas para la conclusion del término legal.

6º: Que la falta absoluta de prueba para condenar á los acusados á la pena de muerte, está además confesada por la autoridad responsable en su informe sin justificación, pues pues en esta pieza y al final de la foja 4 vuelta, se leen estas palabras: "De las diligencias que forman el proceso, se desprenden indicios de la culpabilidad de estos reos, en el delito por que se les juzgó, tan vehementes, tan bien enlazados entre sí y tan claros, que sin vacilacion se ha considerado que forman una prueba plena, siguiendo la doctrina que Escribche asienta en su diccionario de derecho &."

Esta confesion de falta de prueba, no puede ser mas explícita, así como no puede ser mas cazo el error que establece de que aquellos indicios forman plena prueba, ni mas torpe la calumnia que levanta al jurisculto referido.

Hé aquí las testuales palabras de este, en el lugar citado:

"En cuanto á conjeturas, sospechas, argumentos, indicios y presunciones, nada añadiremos á lo que se ha dicho al principio de este artículo, y en las palabras indicio, presuncion; pero *nunca nos cansaremos de repetir*, que nuestras leyes, y especialmente la 12 tit. 14 part. 3ª, así como la de todos los pueblos civilizados, exigen para condenar á un procesado, pruebas mas claras que la luz del día &."

Los términos de la ley citada, no pueden ser mas perentorios y terminantes:

"Criminal pleito, dice, que sea movido

contra alguno en manera de acusacion ó de rauto, debe ser probado abiertamente por testigos, ó por cartas, ó por conocencia del acusado, et non por sospechas tan solamente, ca derecha cosa es que el pleito que es movido contra la persona del home ó contra su fama, que sea probado et averiguado por pruebas claras como la luz, que non venga dubda."

Están tambien confesados por el C. Prefecto, en su citado informe, los visios sustanciales de falta de ratificación de los testigos, con citacion y conocimiento de los reos, y de habérseles negado la prueba que promovió su defensor; y no es menos cazo el error en que incurre la Prefectura en afirmar que esta ha podido, sin faltar á las prescripciones de la ley, negarse á facilitar á los reos y su defensor los datos del proceso para formular su defensa, y mas aun, que pudo omitir esta, pues ya se ha visto lo que previenen los arts. 3º y 1º de la ley de 3 de Mayo de 1873.

7º: Que esta serie de ataques á garantías no suspensas por la ley citada, esta infraccion notoria de leyes terminantes y expresas, que contienen las fórmulas tutelares de la vida del hombre, el primero y mas sagrado de sus derechos, y el desprecio en fin de las prescripciones de la misma ley de plagiarios, traen, como consecuencia necesaria y natural, la demostracion mas evidente de que la sentencia de 28 de Mayo que condenó á los reos á la pena capital, es una providencia que aunque dictada por autoridad competente, no fonda la legalidad del procedimiento, y de que ha habido, por lo mismo, violacion de las garantías que otorga el art. 16 de la Constitucion federal.

Por todo lo expuesto, y con fundamento del art. 101 de la Constitucion y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia federal ampara y protege á María Francisca Urtiz y á José María Amescua, contra la sentencia del C. Prefecto de esta Capital, que los condenó á la pena del último suplicio.

Hágase saber, publíquese, remítanse las copias de estilo, y dese cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Definitivamente juzgando, lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*. Una rúbrica. Ante mí,—*Isidro Aleman*. Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Agosto 10 de 1874.—*Isidro Aleman*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 14 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito Michoacan por el C. Lic. Matías Padilla, defensor de D^a Francisca Urtiz y de José María Amescua, contra el C. Prefecto de Morelia que condenó á una y á otro á la última pena por el plagio cometido en la persona del Dr. D. Octaviano Valdéz.

Considerando: que el artículo 3º de la ley de 3 de Mayo de 1873, prorogada por la de 10 de Abril de este año, se refiere á quienes sean reos de plagio ó salteadores de camino y no á quienes no se pruebe que lo son segun el proceso que se instruya para averiguar si los acusados son ó no reos.

Que esas leyes solo permiten que en la formacion y fallo del proceso dejen de gozar los acusados de las garantías á que se refieren en su primera parte los artículos 13 y 19, y los 20 y 21 de la Constitucion general, mas no de las demás que esta menciona, y de las á que las mismas leyes se refieren.

Que las garantías invocadas por el Lic. Padilla á favor de sus defensos, son las del artículo 16 de la Constitucion general, que no han quedado suspensas por la ley contra plagiarios y salteadores, y las contenidas en el artículo 3º de esta ley que consisten, en que los sospechosos de tales delitos,

no aprehendidos *infraganti*, sean juzgados sumariamente; en que durante el proceso se les admitan las pruebas y defensas que presenten, y en que no se aplique la pena de muerte, sino solo en el caso de que el delito resulte probado plenamente.

Que si bien el Prefecto político de Morelia ha sido competente para juzgar á los acusados por el plagio del Dr. Valdéz, puesto que es la autoridad política del Distrito en que el plagio se cometió, y que si el Presidente del Ayuntamiento de Quiroga en cuya municipalidad tuvo lugar el plagio, obró como agente del Prefecto por pertenecer esa municipalidad al Distrito de Morelia, dicho Prefecto no tuvo fundamento para dictar la sentencia que condena á muerte á la Urtiz y á Amescua, por que el proceso casi en su totalidad está instruido por el Presidente del Ayuntamiento de Quiroga, quien no tuvo facultad para actuar en él, en virtud de que la ley dá esa facultad á los Jefes políticos y no á sus agentes; por que ninguna de las declaraciones de los testigos ha sido ratificada con citacion de los acusados, ni se dió á conocer á estos los nombres de aquellos, lo cual es contrario á los principios reconocidos en materia criminal y á lo que disponen las leyes 17, tit. 13, lib. 12, R. C., 23 de Mayo de 1837 en su artículo 125 y aun al artículo 250 de la ley de Administracion de Justicia del Estado de Michoacan, de 27 de Abril de 1867; por que las declaraciones de algunos testigos y careos de estos con los acusados, que han servido de único fundamento á la sentencia de la Prefectura de Morelia son nulas de derecho, puesto que se han practicado infringiendo disposiciones expresas de ley, pues Santos Mejía es hijo de la Urtiz, Agustín Saavedra es su yerno, María Manuela Morales su cuñada, y José María Amescua su doméstico y presunto cómplice, y tales declaraciones carecen de fuerza legal con arreglo á las leyes 10, 11, 14, 18 y 20, tit. 16, part. 3ª.

Considerando además: que segun apare-

ca, tanto en el proceso cuanto en el expediente de amparo, se negó al defensor de los acusados presentar prueba en favor de ellos, lo cual importa negarles su defensa, siendo así que aun en la ley de 3 de Mayo de 1873, prorogada por la de 10 de Abril de este año, no se suspendió esa garantía constitucional contenida en la parte 5ª del artículo 20 de la Constitución.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el artículo 101 de la misma Constitución, se decreta: que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 4 de Agosto próximo pasado, por el Juez de Distrito de Michoacan, que declara: que la Justicia federal ampara y protege á María Francisca Martínez y José María Amescua, contra la sentencia del C. Prefecto de Morelia, que los condenó á la pena del último suplicio.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—Simón Guzmán.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 12 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de la cantidad de catorce pesos sesenta y dos centavos á título de derechos de introducción, causados por una caja de rebozos remitida de Matatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal dice: que facultado el Congreso de la Union, por el artículo 62 fracción IX de la Constitución general, expidió el decreto de 1º de Mayo de 1868, y con el que ha querido nivelar el comercio de Estado á Estado, en oposicion al que ha decretado el Congreso del Estado de 4 de Diciembre de 1873, supuesto que este impone un gravámen á los efectos nacionales á su introducción, y no lo hace á su importación, y en esta contradicción no hay mas que atenernos á aquella, la que dimanando de la Carta fundamental, debe tenerse como ley suprema, como se previene en su artículo 126.

En consecuencia, el querer llevar á efecto la disposición del Estado, viola indudablemente las garantías que otorga la Constitución en sus artículos 4 y 16, y que invocan los quejosos Sres. Sandoval y Bülle; ni se diga que los rebozos objeto de este amparo, es una mercancía que no produce actualmente el Estado; pero esto lo puede producir, y esta posibilidad hace que se le aplique la ley citada de 1º de Mayo de 1868; de lo contrario daría lugar á que con ese pretexto se impusiesen gravámenes á esos mismos efectos nacionales, lo que ha querido evitar el artículo constitucional, el que impide que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas.

Por todo lo ya expuesto, el que suscribe pide se decrete el amparo tal y como lo han

SECRETARIA
CORTES DE JUSTICIA DE LA MANA